



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Ejecutante	Mary Luz Montes Vera
Ejecutada	Ángela María Muñoz
Tipo de proceso	Ejecutivo
Radicado	053603105002202200022-01
Interno	052-22
Asunto	Auto que rechazó la demanda
Decisión	Confirma auto que negó mandamiento ejecutivo

Vencido el termino concedido a la ejecutante para conferir nuevo poder, procede la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a decidir de fondo el recurso de apelación formulado contra el auto del 08 de febrero de 2022¹.

I. ANTECEDENTES

Mary Luz Montes Vera pretende con la demanda ejecutiva que se libre mandamiento de pago contra Ángela María Muñoz, por la suma de ochenta millones de pesos (\$80.000.000) e intereses moratorios que considera causados a partir del 02 de octubre de 2020 y las costas del proceso².

Aportó como título ejecutivo, un acuerdo transaccional suscrito por ambas partes, cuyo objeto fueron las todas las obligaciones laborales y de aportes a la seguridad que se hubieran podido originar en los servicios prestados por la hoy demandante como empleada doméstica.

¹ 26NiegaMandamiento
² 04Demanda Ejecutiva MARY LUZ MONTES VERA. FI.2

Mediante auto del 8 de febrero de 2022, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí rechazó de plano la demanda por considerar que *“no encuentra claridad el Despacho en el hecho de que se transaron derecho ciertos e indiscutibles, como lo son las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y aportes a la seguridad social, cuyo origen es el contrato verbal y de manera indefinida, que existió entre la señora Angela María Muñoz en calidad de trabajadora y la señora Mary Luz Montes Vera, en calidad de empleadora, con extremos laborales entre el día 03 de enero de 2002 y el 31 de enero de 2020”*³ (cursiva de la Sala)

Recurso de apelación⁴

Inconforme con la decisión, la ejecutante formuló recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que el contrato aportado con la demanda ejecutiva es claro, expreso y exigible, el cual no le vulnera derechos ciertos e irrenunciables, porque se pactó entre las partes el pago de los conceptos que se documentaron.

En auto del 15 de febrero de 2022⁵, el despacho de origen negó la reposición deprecada, señalando que “en el asunto se requirió el análisis previo de validez y eficacia del documento presentado como título ejecutivo, respecto al cual debe reiterarse es un presupuesto de procedibilidad de la acción y debe obrar en el proceso para que sea profiera el correspondiente mandamiento de pago”. Mas adelante dijo: “Del acuerdo allegado de las partes para transigir toda la diferencia surgida, se indica que, si bien la liquidación fue por (\$83.491.117), la señora Mary Luz renuncia al cobro de toda la suma liquidada y acuerdan el pago de (\$80.000.000), no siendo de recibo para esta Judicatura la renuncia de derechos ciertos e indiscutibles, de manera parcial por la suma de (\$3.491.117), más aún, cuando no se especifica a qué conceptos se le aplicaron los descuentos”. Sostiene la falladora que lo anterior genera duda al despacho sobre la existencia de una obligación clara expresa y exigible, debiendo denegarse el mandamiento de pago deprecado.

II. CONSIDERACIONES

³ 26NiegaMandamiento

⁴ 27Recurso

⁵ 28NiegareposicionConcedeApelacion

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del literal B del art.15 del CPTSS y el numeral 8 del artículo 65 del referido código: *“El que decida sobre el mandamiento de pago.”*

El problema jurídico se circunscribe a determinar si el contrato de transacción aportado por la activa presta o no mérito ejecutivo.

El artículo 422 del CGP consagra que “Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”. (subraya de la Sala)

Asimismo, el artículo 100 del CPTSS consagra que puede ser exigible ejecutivamente “el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme (...)”. (subraya la Sala)

Ha definido la doctrina⁶ el título ejecutivo, como todo documento, incluyendo las providencias judiciales y arbitrales, provenientes del deudor o de su causante, donde consta una obligación clara, expresa y exigible en favor de su acreedor o del tenedor legítimo. Por tanto, pueden demandarse *“ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles **que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él...**”*, por así disponerlo el artículo 422 del CGP, aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral.

Ahora, sobre las exigencias que deben cumplir dicha base de recaudo ejecutivo explicó la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia STL17262 de 2016, rad.45312:

⁶ LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, *Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano*, Dupré Editores, Tomo II, 7ª ed., Bogotá, 1999, pags. 388.

*“Vale la pena recordar que los títulos ejecutivos deben cumplir unos requisitos formales y sustanciales. **Los primeros** exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) **sean auténticos** y (ii) **emanen del deudor** o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de un acto administrativo en firme. Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. **Los segundos**, reclaman que el título ejecutivo **contenga una prestación** en beneficio de una persona que debe ser **clara, expresa y exigible**.*

La exigencia de claridad, hace alusión a que los elementos constitutivos emerjan perfectamente de la lectura del título ejecutivo, sin que sean necesarios esfuerzos de interpretación para establecer cuál ha de ser la conducta que debe exigírsele al deudor o el monto de la obligación, en otras palabras, debe ser nítido el crédito - deuda que allí aparece, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones.”

En otras palabras, la obligación es **clara** cuando no da lugar a equívocos porque están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan; es **expresa** cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación, y es **exigible** si se trata de una obligación pura y simple ya declarada. Conviene distinguir que cuando la obligación, con las características anteriores, está contenida o constituida en un solo documento, como, por ejemplo, un título valor como la letra de cambio, cheque, pagaré, entre otros, será un título ejecutivo singular, por el contrario, cuando está integrado por un conjunto de documentos, será complejo.

Consideró la A-quo que el documento aportado por la demandante con miras a obtener que se libre mandamiento de pago, no constituye uno de aquellos que pueda ser ejecutado porque las partes transigieron obligaciones que son ciertas e indiscutibles.

El artículo 2469 del CC consagra que:

“La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.

No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa”.

En ese sentido, el artículo 15 del CST dispone:

“Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles”.

En auto AL1761 de 2020, la Alta Corporación reiteró los presupuestos que deben reunirse en un contrato transaccional en materia laboral:

“(i) exista entre las partes un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver; (ii) el objeto a negociar no tenga el carácter de un derecho cierto e indiscutible; (iii) el acto jurídico sea producto de la voluntad libre de las partes, es decir, exenta de cualquier vicio del consentimiento, y (iv) lo acordado genere concesiones recíprocas y mutuas para las partes (CSJ AL607-2017), o no sea abusiva o lesiva de los derechos del trabajador.”

En el asunto que conoce la Sala en esta oportunidad, aprecia la Sala que el documento esgrimido por la activa como título ejecutivo no satisface las exigencias de los artículos trascritos, ni lo observado por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por las razones que a continuación se expresan:

i) No se precisa cuáles son las obligaciones transigibles a las que renuncia la señora Mary Luz Montes Vera.

ii) Entre las obligaciones que dicen haber transigido se encuentra la de pago de las cotizaciones ante el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, derecho irrenunciable para la presunta trabajadora, el cual, según el texto del contrato transaccional no discuten las partes al haber indicado como su fuente un contrato de verbal de empleada doméstica que dicen tuvo como extremos temporales de inicio el 03 de enero de 2002 y de terminación el 31 de julio de 2020, sin explicar siquiera si la trabajadora estuvo o no afiliada al sistema de seguridad social, para determinar si la señora Angela María Muñoz⁷ debe responder por aportes con intereses⁸ o por cálculo

⁷ Quien valga anotar en el documento no se autodenomina como empleadora.

actuarial⁹ que se hubieren causado durante la vigencia de su vinculación laboral, cuyo capital se traduciría en semanas de cotización para construir una pensión de vejez o de invalidez en favor de quien aquí se presenta como empleada doméstica, o en caso de fallecimiento, una pensión de sobrevivencia en favor de sus beneficiarios. No estando facultadas las partes para disponer de tales conceptos en razón a su naturaleza parafiscal, y menos aún reconocerse a la demandante la facultad para recibirlos, ya que conforme establece el artículo 22 de la ley 100 de 1993 el giro de los aportes debe hacerse al sistema de Seguridad Social Integral a través de la planilla establecida con ese fin, para que éste asuma los riesgos que legalmente ampara, a través de la administradora de fondo de pensiones donde estuviere o se afiliara la presunta trabajadora, no es procedente atribuir mérito ejecutivo a la transacción en ese aspecto.

iii) Al apreciarse que las partes están de acuerdo en la existencia del contrato de trabajo, sus extremos temporales, el salario devengado, la deuda respecto de prestaciones sociales y vacaciones, y que el contrato finalizó sin justa causa, precisando también el valor de la indemnización, no puede predicarse válidamente que las partes estén transigiendo sobre derechos inciertos y discutibles.

iv) No se precisa el lugar de cumplimiento de la obligación, es decir, la dirección ubicada en la ciudad de Medellín en que se obliga la empleadora a efectuar el pago, así como tampoco la hora de cumplimiento de la obligación contraída.

Por lo anterior, si bien puede leerse en la cláusula tercera del contrato de transacción¹⁰: *“En procura de resolver cabalmente las diferencias y prevenir nuevos conflictos o adicionales litigios entre las partes, este contrato de transacción tendrá un alcance integral frente a las diferencias entre la señora MARY LUZ MONTES VERA y la señora ANGELA MARIA MUÑOZ, con estos acuerdos se entenderá transigida toda diferencia surgida entre las partes, sin que existan otros asuntos causados con anterioridad a este documento que estuvieran pendientes de resolver”* y, aun cuando se pactó el valor de la

⁸ mediante la Resolución 2388 de 2016, modificada por las Resoluciones 5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017, 3559, 5306 de 2018, 736, 1740, 2514 de 2019, 454, 686, 1438, 1844, 2421 de 2020; 014, 638, 365y 1697 de 2021 261, 939 y 2012 de 2022; 728 y 1271 de 2023 se unifican las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes — PILA, con el fin de ser aplicados por los aportantes, los operadores de información y las administradoras del Sistema.

⁹ El inciso 6° del artículo [2.2.16.7.18](#) del Decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, dispuso que en el caso en que, por omisión, el empleador no hubiera afiliado a sus trabajadores al Sistema General de Pensiones debiendo hacerlo, el cómputo para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y la fecha de afiliación tardía, solo será procedente mediante el pago de la reserva actuarial o el título pensional correspondiente, calculado conforme lo señala el Capítulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del citado Decreto.

¹⁰ 04DemandaEjecutiva MARY LUZ MONTES VERA.fl5/8.

obligación y el plazo al que se sometió su pago, ante la falta de claridad del documento que se pretende hacer valer como título ejecutivo, el cual recae sobre obligaciones que por lo expresado se entienden como ciertas e irrenunciables, en especial la asociada al pago de cotizaciones ante el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, cuyo destinatario es éste y no la demandante, no hay lugar a librar el mandamiento de pago pretendido, si no a denegarlo, y por tanto, a **confirmar** el auto conocido en apelación.

Lo anterior sin perjuicio del trámite adelantado por la señora Mary Luz Montantes Vera ante la Operadora de Insolvencia Económica de Personas Naturales¹¹, para el cobro de las acreencias ciertas e indiscutibles contenidas en el documento aportado como transacción, como aquellas no contenidas en él.

III. COSTAS

Al haberse resuelto negativamente el recurso de apelación, en principio habría de entenderse que se causaron costas a cargo de la recurrente. Sin embargo, al no haberse trabado la litis, se le exonera de dicho pago.

IV. DECISION DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 08 de febrero de 2022, emitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, dentro del proceso ejecutivo promovido por MARY LUZ MONTES VERA contra ÁNGELA MARÍA MUÑOZ, por las razones aquí expuestas. Envíese copia de esta decisión a la Operadora de Insolvencia Económica de Personas Naturales

SEGUNDO: Sin costas en esta sede.

¹¹ Flor María Cano Gutiérrez, quien se encarga del proceso de negociación de deudas según auto que admite el trámite de negociación de deuda obrante en documento 02SegundaInstancia, 03SolicitudSuspensiónRenunciaPoder, pág. 3/9

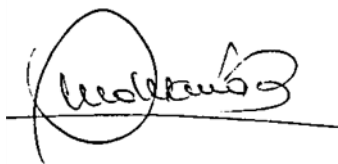
Devuélvase el expediente al Juzgado de procedencia.

Se ordena notificar lo resuelto por estados.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO

Certifico que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS N°74 fijados hoy 2 de mayo de
2024 a las 8:00AM

El secretario